

52ª REUNION — Continuación de la 1ª SESION EXTRAORDINARIA —  
DICIEMBRE 14 DE 1973

Presidencia de los señores diputados Salvador F. Busacca e Isidro J. Odena

Secretarios: doctor Alberto L. Rocamora y señor Ludovico Lavia

DIPUTADOS PRESENTES:

ACEVEDO, Carlos Luis  
ACUÑA, Hipólito  
AGUIRRE, Mario D.  
AGUIRRE de SAIBENE, Luisa E.  
ALVAREZ GUERRERO, Osvaldo  
AMADO SALEME, José  
AMAOLLO, Mario O.  
AMAYA, Mario Abel  
AMERISE, José Carmelo  
ARATA, Juan Carlos  
ARBO, Tomás Ameghino  
ARCE, Rodolfo Juvenio  
ARIGOS, Ramón Eduardo  
ARRAYA, Jorge Francisco  
ARRUE, Willebrordo  
ASMAR, Ramón  
AUYERO, Carlos Alberto Camilo  
AVILA, Agustín Alfredo  
AZURMENDI, Ernesto  
BAJCZMAN, Raúl I.  
BARBARO, Julio D.  
BARRIONUEVO, Roque R.  
BARTOMIOLI, Héctor Luis  
BEHERAN, Arnoldo Mario  
BELLISIO, Victorio Alberto  
BENEDETTI, Osvaldo Ernesto  
BONAS, Abraham Efraim  
BONIFATTI, Arolinda S. A.  
BORRAS, Raúl Antonio  
BRAVO, Carlos Alberto  
BRAVO, Federico S.  
BRITO LIMA, Alberto  
BUSACCA, Salvador F.  
BUSTOS, Tomás Roberto  
CABANA, Manuel I.  
CABEZAS, José Humberto  
CALABRESE, Pablo  
CAMPOS, Ernesto Manuel  
CAMES, Jorge M.  
CARDENAS, Juan Carlos  
CARRAL TOLOSA, Humberto  
CARRERAS, Ruperto R.  
CASAZZA, Luis Ángel  
CATALANO, José Armando  
CITATI, Angel  
COLELLO, Clemente J.  
COSSY ISASI, Edgar  
CROATTO, Armando Daniel  
CROCCO, Luis Ferdinando  
CHAQUIREZ de PALACIOS, María  
D'ANGELO, Lorenzo Francisco  
DAVICO, Miguel Angel  
DAY, Alberto Ricardo  
DE APARICI, Ricardo José Manuel

DE LUCA, Ricardo  
DESPERBASQUES, Rodolfo Eduardo  
DÍAZ ORTIZ, Santiago Francisco  
EGUIREUN, Enrique  
ESPECHE, Juan Bautista  
ESPONDABURU, Raúl Horacio  
ESQUIVEL, Faustino  
ESTIGARRIA, Agustín Tomás  
FALABELLA, Francisco José  
FALU, Ricardo Muniz  
FARIAS, Eduardo Isidro  
FERNANDEZ, Juan Máximo  
FERNANDEZ BEDOYA, Mariano  
FERNANDEZ GILL, Guillermo Carlos  
FERNANDEZ VALONI, José Luis  
FERREYRA, Jorge Washington  
FLORES, José María F.  
FONTE, Carlos A.  
FRANCO, Hugo Armando  
FRESCHI, Pedro José  
FUENTES, Pedro Alfredo  
GAITAN, Adelfo Alberto  
GALLO, Carlos R.  
GANEM, Héctor  
GARCIA, Luis Antonio  
GARONA, Alberto A.  
GARRÉ, Nilda Celia  
GASS, Adolfo  
GIMÉNEZ, Nicolás Alberto  
GLELLEL, Jorge  
GOLE, Tomás Juan B.  
GONZALEZ, Ricardo A.  
GRAU, Mario Agustín  
GUALCO, Jorge Nelson  
GUERRERO, Antonio Isaac  
HAIER, José  
HARRINGTON, Luis José D.  
HUEYO, Horacio  
HUGHES, Gilbert  
IMBAUD, Carlos Alfredo  
INSUA, Carlos Raúl  
ITURRIETA, Anibal A.  
KELLY, Rodolfo Feliciano  
KUNKEL, Carlos Miguel  
LASTIRI, Raúl Alberto  
LATRUBESSE, Francisco Alberto  
LAVALLE, Mario  
LAZZARINI, José Luis  
LENCINA, Luis A.  
LÉPEZ, Lysis Augusto  
LIMA, Hugo Ramón  
LITERAS, María Haydée A. de  
LONCHARICH FRANCH, Cándido A.  
LÓPEZ, Horacio Fidel  
LÓPEZ, Miguel Ángel

LÓPEZ de GALLO, Amella  
LUCENA, Luis Arnaldo  
LUMELLO, José Elio  
LLANO, Juan Pedro  
LORENS, Roberto Oscar  
MACRIS, Antonio J.  
MARIÑEZ, Juan Antonio  
MARTINEZ, Pedro Nicolás  
MARTOS, Mario Saúl  
MASTOLORENZO, Vicente  
MAUBUM, Fernando Hugo  
MERA FIGUEROA, Julio T.  
MERCHENSKY, Marcos  
MIGLIOZZI, Julio Alberto  
MIGUEL, Pedro Honorio  
MIRA, Jesús  
MOLINA, Gilberto H.  
MOLINA, Manuel Isidro  
MOLINA ZAVALIA, Armando  
MOLINARI ROMERO, Manuel Ernesto  
MONACO, Horacio Miguel  
MONSALVE, Evaristo A.  
MONTERO TELLO, Régulo L.  
MORENO, Antonio E.  
MORENO FERRER, José Carlos W.  
MORINI, María Teresa Merciadri de  
MOYANO, Francisco J.  
MUNIZ BARRETO, Diego  
MUSACCHIO, Vicente Miguel  
MUSSO, Eufemia  
NARANJO, Decio B.  
NATALE, Ricardo T.  
NICOLICHE, Lisardo Oscar  
NOSTIGLIA, Plácido Enrique  
ODENA, Isidro J.  
OSELIA MUÑOZ, Enrique Emilio  
PARENTÉ, Rodolfo Domingo  
PASCUAL, Pauline Rubén  
PATLAGOITIA, Osvaldo E.  
PAZ, Guido Ulises  
PEDRINI, Ferdinando  
PEREIRA, Antonio  
PETRUCELLI, Agustín  
PONCE, Rodolfo Antonio  
PORTERO, Héctor  
PORTO, Jesús E.  
RABANAL, Rubén Francisco  
RACCHINI, Juan Nicolás  
RAFAEL, Juan  
RAMIREZ, Juan Manuel  
RITVO, Miguel  
RIZO, Eusebio Víctor  
RODRIGUEZ, Alfredo S.  
RODRIGUEZ FLORES, Argentina  
ROJAS, Ramón Pablo

ROLANDO, Esteban Domingo  
 ROMÁN, Irene Graciela  
 ROMERO, Carlos Alberto  
 ROMERO, Juana N.  
 ROSAS, Alberto Horacio  
 ROTA, Silvana María I.  
 RUBEO, Luis  
 RUIZ VILLANUEVA, Arturo  
 SALIM, Luis  
 SALOMÓN, Jorge  
 SALVADOR, Nicolás  
 SALVATIERRA, Julio Domingo  
 SAMBUEZA, Osvaldo  
 SÁNCHEZ AHUMADA, Luis Alberto  
 SANDLER, Héctor Raúl  
 SANGUINETI, Virginia Luisa  
 SARBOLI, Rubén Juan  
 SARLI, Osvaldo Raúl  
 SAUL, Roberto  
 SERVINI GARCÍA, Clara Cristina  
 SILEONI, Nelo I.  
 SILVA, Analicio  
 SLAMOVITS, Ludovico  
 SOLANA, Jorge D.  
 STECCO, Alberto Eleodoro  
 TURLA, Eduardo B.  
 SUÁREZ, Humberto F.  
 SUÁREZ, Leopoldo M.  
 SUELDO, Horacio Jorge

SULETA DE ARRAYA, Arminda  
 SVRSEK, Enrique A.  
 TACHELLA, Eliberto S. J.  
 TAGLIAFERRO, Jorge  
 TOLLER, Roberto Lino  
 TRABOULSI, Eduardo Elías  
 TRÓCCOLI, Antonio A.  
 TULA DURAN, Joaquín  
 URDÍNEZ de VOLPE, Clotilde Isolina  
 VACCAREZZA, Eduardo H.  
 VALERI, Salvador  
 VÁZQUEZ PÓL, José  
 VERGARA, Roque Antonio  
 VIDANA, Roberto  
 VILLADA, Mario Anselmo  
 VILLALBA, Bernardo Samuel  
 VINARDELL MOLINERO, Miguel  
 VITTAR, Rodolfo Oscar  
 ZAPATA, Hipólito Bernardo

## AUSENTES, CON AVISO:

ARAGONES, Carlos Osvaldo  
 ARANA, Tomás Pedro  
 ARIANI, Adriano  
 BALESTRA, Ricardo Ramón  
 BLANCO, Manuel  
 CAMPBELL, Oscar S.

CAPILLO, José  
 CASTELLANO, Hugo Luis  
 COMINGUEZ, Juan Carlos  
 COSTARELLI, José  
 FADUL de SOBRINO, Esther Mercedes  
 FERNÁNDEZ, Dante Dionisio  
 GALVÁN, Raúl Alfredo  
 GUZMAN de ANDREUSSI, María Cristina  
 LABAKE, Juan Gabriel  
 LÓPEZ, Domingo  
 LORENCE, Mariano Rufino  
 MALDONADO, Clemente  
 MARINO, Rafael Francisco  
 MÁRQUEZ, Alfonso Carlos  
 MASSOLO, Eduardo A. R.  
 MOMBELLI, Fausto J.  
 MORAL, Angel  
 PALACIO DEHEZA, Carlos  
 RATTI, Luis Carlos  
 SÁNCHEZ TORANZO, Nicasio  
 SANGIACOMO, Ricardo Arturo  
 SOBRINO ARANDA, Luis Alberto  
 VIALE, Jorge Omar  
 VINTI, Carmelo  
 ZAMANILLO, José Miguel

## AUSENTE, CON LICENCIA:

VALENZUELA, Héctor R.

## SUMARIO

- 1.—Consideración de un nuevo dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre modificación de la ley de impuestos internos. (Página 4978.)
- 2.—Consideración del dictamen de las comisiones de Legislación Penal y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión sobre sanción penal de la grave defraudación fiscal. (Página 4980.)

—En Buenos Aires, a los catorce días del mes de diciembre de 1973, a la hora 17 y 10:

## I

## IMPUESTOS INTERNOS

**Sr. Presidente** (Busacca). — Continúa la sesión.

Corresponde considerar el nuevo dictamen que ha producido la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre modificación de las leyes de impuestos internos y de otros gravámenes.

## Dictamen de comisión

## Honorable Cámara:

La Comisión de Presupuesto y Hacienda ha considerado el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se introducen algunas modificaciones a las leyes de impuestos internos y de ventas, se deroga el gravamen establecido por el artículo 17 del decreto ley 18.284/69 y se suprime el impuesto para educación técnica a partir de 1976; y, por las razones que dará el miembro informante y las que se expresan en el informe adjunto, aconseja la sanción del siguiente

## PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

Artículo 19 — Modificase, a partir del 19 de enero de 1974, la ley de impuestos internos (texto ordenado en 1973 y sus modificaciones), en la siguiente forma:

1. Substitúyese el artículo 27 por el siguiente:

Artículo 27. — Los cigarrillos, tanto de producción nacional como importados, tributarán sobre el precio de venta al consumidor, inclusive impuesto, por cada unidad básica de diez (10) cigarrillos, un impuesto del:

- a) Sesenta y tres y medio por ciento (63,5 %) cuando se trate de cigarrillos manufacturados exclusivamente con tabaco negro;
- b) Sesenta y cinco por ciento (65 %) cuando se trate de cigarrillos manufacturados con no menos del cincuenta por ciento (50 %) de tabaco negro;
- c) Sesenta y seis y medio por ciento (66,5 %) cuando se trate de cigarrillos no comprendidos en los incisos anteriores.

Los cigarrillos de producción nacional o extranjera deberán expendirse en paquetes o envases en las condiciones y formas que reglamente el Poder Ejecutivo.

2. Substitúyese el texto del artículo 80 por el siguiente:

Artículo 80. — Cuando las normas reglamentarias o las resoluciones de la Dirección General Impositiva establezcan la obligación de adherir instrumentos probatorios del

bebidas gasificadas y los refrescos para estar exentos del impuesto.

Analizada la situación en la comisión y oídas las explicaciones adicionales recibidas de varios señores diputados que se hicieron presentes para colaborar en el estudio de este problema, la comisión decidió retirar esta modificación de manera de dejar el texto de la ley vigente; es decir, el que establece dicho contenido en un diez por ciento. Razones de capacidad natural de las bebidas para expenderse con altos contenidos aconsejan dejar el porcentaje vigente.

Los artículos 2º y 3º del despacho son coincidentes con lo ya resuelto por la Cámara y se corresponden con los mismos números del dictamen original número 5. Por el primero de ellos se ratifican diferentes modificaciones introducidas en la ley de impuestos internos a partir de 1967 y hasta 1973, mientras que por el segundo se deroga expresamente el artículo 17 del decreto ley 18.284, de 1969.

Otro aspecto al que quiero hacer referencia tangencial es que este dictamen ha tomado en consideración los argumentos vertidos en esta Cámara respecto de la vigencia del impuesto para educación técnica y, por ende, no contiene ninguna disposición sobre ello. Recuérdese que el despacho original establecía la derogación de dicho impuesto a partir del 1º de enero de 1976.

Por los motivos expuestos, solicito la aprobación de este dictamen.

**Sr. Presidente (Busacca).** — Tiene la palabra el señor diputado Federico Bravo.

**Sr. Bravo (F.S.).** — Deseo que la Presidencia aclare si se trata de la reconsideración de una resolución de esta Cámara.

**Sr. Presidente (Busacca).** — Así es, señor diputado; oportunamente se debe votar la moción de reconsideración.

**Sr. Bravo (F.S.).** — El señor diputado preopinante ha dicho que en la comisión fue reconsiderado un proyecto aprobado en esta Honorable Cámara a pedido de varios señores diputados que se hicieron presentes. Me extraña que siendo yo el autor de esa modificación no se me haya notificado en su debido momento.

No temo un debate sobre este tema y, por el contrario, me deseo hubiera sido efectuar una amplia discusión con la participación de todos los sectores políticos de la Cámara, porque ello hace a la economía y a la salud del pueblo argentino. Pero dadas las circunstancias en que es traída al recinto esta nueva consideración del problema, anticipo que me opongo a su tratamiento.

**Sr. Presidente (Busacca).** — Tiene la palabra el señor diputado Rabanal.

**Sr. Rabanal.** — A efectos de aunar criterios, solicito que se disponga un breve cuarto intermedio en las bancas.

**Sr. Presidente (Busacca).** — Mientras se llama para votar, la Presidencia invita a los

señores diputados a pasar a un breve cuarto intermedio en las bancas.

—Luego de unos instantes:

**Sr. Presidente (Busacca).** — Continúa la sesión.

Queda en suspenso el tratamiento del dictamen sobre impuestos internos hasta tanto la comisión vuelva a expedirse.

## 2

### DEFRAUDACION FISCAL

#### Dictamen de comisión

*Honorable Cámara:*

Las comisiones de Legislación Penal y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de ley en revisión sobre sanción penal de la grave defraudación fiscal; y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconsejan la sanción del siguiente

#### PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

#### Penas y responsables

Artículo 1º — Serán reprimidos con pena de prisión de un (1) mes a cuatro (4) años los responsables por deuda propia o ajena que mediante ocultamiento malicioso o valiéndose de cualquier ardid o engaño evadan, total o parcialmente, por un monto superior a cien mil pesos (\$ 100.000) anuales uno o más tributos a cargo de la Dirección General Impositiva. El límite mínimo establecido en el presente artículo no regirá para quienes reincidieran en el hecho incriminado.

Art. 2º — Los agentes de retención y los de percepción que no ingresen el impuesto retenido o percibido dentro de los treinta (30) días corridos inmediatos siguientes al vencimiento de los plazos establecidos para su ingreso estarán sujetos a la pena de prisión de uno (1) a seis (6) años.

Art. 3º — La prisión será de uno (1) a seis (6) años cuando para cometer el delito previsto en el artículo 1º se recurra al empleo de figuras societarias simuladas o personas interpuestas, a documentos simulados o falsos para justificar pasivos ficticios o se simule la existencia de inversiones con el objeto de obtener franquicias o desgravaciones impositivas; igual pena corresponderá a quienes, para frustrar en todo o en parte el pago del impuesto evadido, gravaren, inutilizaren, destruyeren, dañaren o de cualquier manera hicieran desaparecer bienes o disminuiran su valor.

Art. 4º — Será reprimido con pena de prisión de tres (3) a nueve (9) años el que por amenazas de imputar a otro los delitos previstos en la presente ley le obligue a poner a su disposición, o a la de un tercero, cosas, dinero, documentos o cualquier otro bien, o destruir o suscribir documentos de obligación o de cré-

dito. La pena aplicable será de cuatro (4) a diez (10) años de prisión si el autor del hecho mencionado en este artículo fuera funcionario público.

Art. 5º — Cuando alguna de las personas referidas en los artículos anteriores fuera un ente de existencia ideal o un incapaz, la pena de prisión se aplicará a los miembros de la misma, directores, administradores, gerentes, mandatarios, gestores o representantes de aquéllos, que hayan intervenido en la comisión del hecho de que se trate en nombre o beneficio de dicha persona ideal o incapaz o en el suyo propio.

Art. 6º — Las sanciones impuestas por el régimen de la presente ley implicarán la inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena para el comercio o el desempeño de funciones públicas o de gerencia, dirección o sindicatura de sociedades y para el ejercicio profesional cuando se trate de profesionales universitarios, siempre que éstos en ejercicio de sus actividades como tales hubiesen tenido participación en la realización de los hechos penados por esta ley.

#### *Sumario administrativo de prevención*

Art. 7º — Cuando en ejercicio de las atribuciones conferidas a la Dirección General Impositiva por la legislación vigente aquella presumiera la existencia de actos reprimidos por la presente ley, el director general o los funcionarios que éste designe procederán a instruir el pertinente sumario administrativo de prevención, a cuyo efecto queda facultado para:

- a) Citar a las personas de quienes considere procedente recibir declaraciones y a las que deban ser careadas en rueda de personas;
- b) Exigir de los contribuyentes, responsables y terceros la presentación de todos los comprobantes y justificativos que se refieren a los hechos motivo del sumario;
- c) Realizar pericias técnicas por expertos de la Dirección General Impositiva, o mediante la colaboración de organismos oficiales, de toda clase de libros, papeles, correspondencia, documentos o referidas a las modalidades operativas de la actividad vinculadas con las personas o entidades sometidas a investigación;
- d) Si en el ejercicio de las atribuciones consignadas en este artículo fuera necesario detener a personas que se nieguen a prestar declaración, salvo que se trate del imputado, practicar allanamientos, secuestros, registros o inspecciones de oficinas, libros, papeles, correspondencia, archivos o documentos de las personas o entidades mencionadas en el inciso b), se solicitarán las órdenes de detención o allanamiento al juez competente, quien resolverá dentro de las veinticuatro horas. Tales órdenes no serán necesarias para los allanamientos y se-

cuestros en edificios y lugares públicos y en negocios, comercios, locales, centros de reunión o recreo y establecimientos industriales, en lugares abiertos al público, con excepción de las partes destinadas a habitación o residencia particular;

- e) Cuando se responda verbalmente a los requerimientos previstos en los incisos a) y b), se realicen las diligencias del inciso d), o cualquier otra de comprobación que pueda tener alguna importancia para la causa, o se examinen libros, papeles, etcétera, se dejará constancia en actas de la existencia o individualización de los elementos exhibidos, manifestaciones verbales prestadas, resultado en las diligencias practicadas, etcétera. Dichas actas, que extenderán los funcionarios de la dirección, sean o no firmadas por el interesado, servirán de prueba en el juicio respectivo al igual que las pericias a que hace referencia el inciso c);

- f) Solicitar a los organismos y entes estatales y paraestatales, nacionales, provinciales y municipales, las informaciones que faciliten la investigación de los hechos del sumario. La información requerida no podrá denegarse invocando lo dispuesto en las leyes, cartas orgánicas o reglamentaciones que hayan determinado la creación o rijan el funcionamiento de los organismos y entes referidos. Esta atribución y la correlativa obligatoriedad de prestar colaboración regirá también para los funcionarios públicos o instituciones bancarias, oficiales, mixtas o privadas.

Art. 8º — Instruido el sumario administrativo de prevención, el mismo quedará concluido con un informe fundado sobre los hechos investigados, y si de sus conclusiones resultare indicio vehemente o semiplena prueba de aquéllos, el director general o los funcionarios de la repartición que éste designe en cada caso iniciarán denuncia o querella ante el juez competente.

#### *Proceso judicial*

Art. 9º — El sumario administrativo labrado en las condiciones establecidas en esta ley constituirá la base del proceso judicial y se elevará al juez competente ante quien se formule la denuncia o querella.

Art. 10. — Los procedimientos de determinación tributaria o de aplicación de sanciones fiscales así como también las resoluciones que en los mismos se dicten con arreglo a la ley 11.683 (texto ordenado en 1968 y sus modificaciones) no constituirán cuestiones prejudiciales a las denuncias o querellas que se inicien por aplicación del artículo 8º ni a las sentencias que recaigan en los procesos establecidos en la presente ley. Cuando el delito imputado sea la evasión fiscal, no se dictará sentencia condenatoria hasta que

exista resolución firme en materia fiscal; esta resolución no producirá efecto alguno en sede penal.

#### *Disposiciones complementarias*

Art. 11. — Serán competentes para entender en las causas que se promuevan por aplicación de esta ley, los jueces nacionales de primera instancia en lo Penal Económico de la Capital Federal y los jueces federales de sección en las provincias y territorios nacionales según el lugar en que se hubiere cometido la infracción.

Art. 12. — La pena de prisión establecida por esta ley será impuesta sin perjuicio de las sanciones fiscales previstas por la legislación vigente, las que continuarán siendo aplicadas por la Dirección General Impositiva.

Art. 13. — Las disposiciones de la presente ley no serán de aplicación con relación a los gravámenes comprendidos en el título I de la ley de Impuestos Internos (texto ordenado en 1968 y sus modificaciones).

Art. 14. — Modifícase el párrafo segundo del artículo 45 de la ley 11.683 suprimiéndose el término «fraudulentamente» y derógase el delito de retención indebida reprimido con pena de prisión previsto en el artículo precitado.

Art. 15. — Las disposiciones generales del Código Penal serán de aplicación a los efectos de esta ley.

Art. 16. — A los efectos de esta ley serán de aplicación las disposiciones del título XI del capítulo XIII del Código Penal.

Art. 17. — La presente ley entrará en vigor a los noventa días de su publicación en el Boletín Oficial. El Poder Ejecutivo podrá disponer la prórroga de su entrada en vigencia por un plazo determinado, comunicándolo al Congreso.

Art. 18. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

*Jesús Edelmiro Porto. — Carlos Miguel Kunkel. — Gilberto H. Molina. — Juan Carlos Cárdenas. — Pedro Nicolás Martínez. — Edgar Cossy Isasi. — Lorenzo Francisco D'Angelo. — Faustino Esquivel. — Manuel I. Cabana. — Santiago Francisco Díaz Ortiz. — Agustín Alfredo Avila. — Roque Antonio Vergara. — Jorge Glellel. — Salvador F. Busacca. — Marcos Merchensky. — Hugo Ramón Lima. — Raúl Antonio Borrás. — Rubén Francisco Rabanal. — Leopoldo M. Suárez. — Antonio A. Tróccoli.*

En disidencia parcial:

*Carlos A. Fonte. — Carlos Luis Accvedo. — Alberto Ricardo Day. — Vicente Miguel Musacchio. — Manuel Ernesto Molinari Romero.*

#### *Modificaciones propuestas por las comisiones de Legislación Penal y de Presupuesto y Hacienda*

Substitución del artículo 1º por el siguiente:

Artículo 1º — Será reprimido con pena de prisión de un mes a cuatro años el que, mediante ocultamiento malicioso o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño, evadiera, total o parcialmente, obligaciones tributarias de percepción a cargo de la Dirección General Impositiva, por un monto superior a \$ 100.000 en un año, o a \$ 150.000 en lapsos de hasta cuatro años.

Modificación del artículo 7º, inciso d):

Se suprime el siguiente párrafo: «Tales órdenes no serán necesarias para los allanamientos y secuestros en edificios y lugares públicos y en negocios, comercios, locales, centros de reunión o recreos y establecimientos industriales, en lugares abiertos al público, con excepción de las partes destinadas a habitación o residencia particular».

Substitución del artículo 10 por el siguiente:

Artículo 10. — En las causas que se originen por la aplicación de la presente ley, no se dictará sentencia hasta que exista resolución firme en materia fiscal; esta resolución no producirá efecto alguno en sede penal.

Substitución del artículo 14 por el siguiente:

Artículo 14. — Modifícase el artículo 45 de la ley 11.683 suprimiéndose el término «fraudulentamente» introducido por la ley 20.046; y derógase el delito de retención indebida reprimido con pena de prisión previsto en el artículo precitado.

#### ANTECEDENTE

Buenos Aires. 23 de noviembre de 1973.

*Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.*

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley, que paso en revisión a esa Honorable Cámara:

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

#### *Penas y responsables*

Artículo 1º — Serán reprimidos con pena de prisión de un mes a cuatro años los responsables por deuda propia o ajena, que mediante ocultamiento malicioso o valiéndose de cualquier ardid o engaño evadan o intenten evadir total o parcialmente, por un monto superior a 250.000 pesos anuales, uno o más tributos a cargo de la Dirección General Impositiva. El límite mínimo establecido en el presente artículo no regirá para quienes reincidieran en el hecho incriminado.

Art. 2º — Los agentes de retención y los de percepción que no ingresen el impuesto retenido o perci-

bido dentro de los treinta (30) días corridos inmediatos siguientes al vencimiento de los plazos establecidos para su ingreso, estarán sujetos a la pena de prisión de uno a seis años.

Art. 3º — La prisión será de uno a seis años cuando para cometer el delito previsto en el artículo 1º se recurra al empleo de figuras societarias simuladas o personas interpuestas, a documentos simulados o falsos para justificar pasivos ficticios o se simule la existencia de inversiones con el objeto de obtener franquicias o desgravaciones impositivas; igual pena corresponderá a quienes, para frustrar en todo o en parte el pago del impuesto evadido gravaren, inutilizaren, destruyeren, dañaren o de cualquier manera hicieran desaparecer bienes o disminuyeran su valor.

Art. 4º — Será reprimido con pena de prisión de tres a nueve años el que por amenazas de imputar a otro los delitos previstos en la presente ley, le obligue a poner a su disposición o a la de un tercero, cosas, dinero, documentos o cualquier otro bien o destruir o subscribir documentos de obligación o de crédito. La pena aplicable será de cuatro a diez años de prisión si el autor del hecho mencionado en este artículo fuera funcionario público.

Art. 5º — Cuando alguna de las personas referidas en los artículos anteriores fuera un ente de existencia ideal o un incapaz, la pena de prisión se aplicará a los miembros de la misma, directores, administradores, gerentes, mandatarios, gestores o representantes de aquéllos, que hayan intervenido en la comisión del hecho de que se trate en nombre o beneficio de dicha persona ideal o incapaz o en el suyo propio.

Art. 6º — Las sanciones impuestas por el régimen de la presente ley implicarán la inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena para el comercio o el desempeño de funciones públicas o de gerencia, dirección o sindicatura de sociedades y para el ejercicio profesional cuando se trate de profesionales universitarios, siempre que éstos en ejercicio de sus actividades como tales hubiesen tenido participación en la realización de los hechos penados por esta ley.

#### *Sumario administrativo de prevención*

Art. 7º — Cuando en ejercicio de las atribuciones conferidas a la Dirección General Impositiva por la legislación vigente, aquélla presumiera la existencia de actos reprimidos por la presente ley, el director general o los funcionarios que éste designe procederán a instruir el pertinente sumario administrativo de prevención, a cuyo efecto queda facultado para:

- Citar a las personas de quienes considere procedente recibir declaraciones y a las que deban ser careadas en rueda de personas;
- Exigir de los contribuyentes, responsables y terceros la presentación de todos los comprobantes y justificativos que se refieren a los hechos motivo del sumario;
- Realizar pericias técnicas por expertos de la Dirección General Impositiva o mediante la colaboración de organismos oficiales en toda clase de libros, papeles, correspondencia, documentos o referidas a las modalidades operativas de la actividad vinculadas con las personas o entidades sometidas a investigación;
- Si en el ejercicio de las atribuciones consignadas en este artículo fuera necesario detener a personas que se nieguen a prestar declaración, practicar allanamientos, secuestros, registros o inspecciones de oficinas, libros, papeles,

correspondencia, archivos o documentos de las personas o entidades mencionadas en el inciso b), se solicitarán las órdenes de detención o allanamiento al juez competente, quien resolverá dentro de las veinticuatro horas. Tales órdenes no serán necesarias para los allanamientos y secuestros en edificios y lugares públicos y en negocios, comercios, locales, centros de reunión o recreo y establecimientos industriales, en lugares abiertos al público, con excepción de las partes destinadas a habitación o residencia particular;

- Cuando se responda verbalmente a los requerimientos previstos en los incisos a) y b), se realicen las diligencias del inciso d) o cualquier otra de comprobación que pueda tener alguna importancia para la causa o se examinen libros, papeles, etcétera, se dejará constancia en actas de la existencia o individualización de los elementos exhibidos, manifestaciones verbales prestadas, resultado de las diligencias practicadas, etcétera. Dichas actas, que extenderán dos funcionarios de la dirección sean o no firmadas por el interesado, servirán de prueba en el juicio respectivo, al igual que las pericias a que hace referencia el inciso c);
- Solicitar a los organismos y entes estatales y paraestatales, nacionales, provinciales y municipales las informaciones que faciliten la investigación de los hechos del sumario. La información requerida no podrá denegarse invocando lo dispuesto en las leyes, cartas orgánicas o reglamentaciones que hayan determinado la creación o rijan el funcionamiento de los organismos y entes referidos. Esta atribución y la correlativa obligatoriedad de prestar colaboración regirá también para los funcionarios públicos o instituciones bancarias, oficiales, mixtas o privadas.

Art. 8º — Instruido el sumario administrativo de prevención, el mismo quedará concluido con un informe fundado sobre los hechos investigados y si de sus conclusiones resultare indicio vehemente o semiplena prueba de aquéllos, el director general o los funcionarios de la repartición que éste designe en cada caso iniciarán denuncia o querrela ante el juez competente.

#### *Proceso judicial*

Art. 9º — El sumario administrativo labrado en las condiciones establecidas en esta ley constituirá la base del proceso judicial y se elevará al juez competente ante quien se formule la denuncia o querrela.

Art. 10. — Los procedimientos de determinación tributaria o de aplicación de sanciones fiscales, así como también las resoluciones que en los mismos se dicten con arreglo a la ley 11.683 (texto ordenado en 1968 y sus modificaciones), no constituirán cuestiones prejudiciales a las denuncias o querrelas que se inicien por aplicación del artículo 8º ni a las sentencias que recaigan en los procesos establecidos en la presente ley. Cuando el delito imputado sea la evasión fiscal, no se dictará sentencia condenatoria hasta que exista resolución firme en materia fiscal; esta resolución no producirá efecto alguno en sede penal.

#### *Disposiciones complementarias*

Art. 11. — Serán competentes para entender en las causas que se promueven por aplicación de esta ley

los jueces nacionales de primera instancia en lo Penal Económico de la Capital Federal y los jueces federales de sección en las provincias y territorios nacionales según el lugar en que se hubiere cometido la infracción.

Art. 12. — La pena de prisión establecida por esta ley será impuesta sin perjuicio de las sanciones fiscales previstas por la legislación vigente, las que continuarán siendo aplicadas por la Dirección General Impositiva.

Art. 13. — Las disposiciones de la presente ley no serán de aplicación con relación a los gravámenes comprendidos en el título I de la ley de impuestos internos (texto ordenado en 1968 y sus modificaciones).

Art. 14. — Deróganse los párrafos tercero, quinto y sexto del artículo 45 de la ley 11.683 (texto ordenado en 1968 y sus modificaciones) y modifícase el párrafo segundo del mismo suprimiéndose el término «fraudulentamente».

Art. 15. — Las disposiciones generales del Código Penal serán de aplicación a los efectos de esta ley.

Art. 16. — A los efectos de esta ley serán de aplicación las disposiciones del título XI del capítulo XIII del Código Penal.

Art. 17. — La presente ley entrará en vigor a los noventa días de su publicación en el Boletín Oficial. El Poder Ejecutivo podrá disponer la prórroga de su entrada en vigencia por un plazo determinado, comunicándolo al Congreso.

Art. 18. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dios guarde al señor presidente.

JOSÉ ANTONIO ALLENDE  
Aldo H. Cantoni.

**Sr. Presidente (Busacca).** — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor miembro informante, diputado Cossy Isasi.

**Sr. Cossy Isasi.** — Señor presidente: en nombre de las comisiones de Legislación Penal y de Presupuesto y Hacienda me corresponde informar en general sobre este proyecto de ley en revisión, mediante el cual se instituye el llamado delito de defraudación fiscal, siempre referente a la obligación que tiene el contribuyente ante la Dirección General Impositiva.

Me permito pedir a la Honorable Cámara, en nombre de las comisiones que represento, la aprobación de este dictamen, por las razones que paso a exponer.

Como no escapa al conocimiento de los señores diputados, en nuestra patria se ha iniciado una etapa de reconstrucción nacional que abarca todos los aspectos de la actividad de sus habitantes. Es decir que comprende a las actividades política, cultural, social, económica y financiera, entre otras.

Corresponde destacar una vez más que a esa gran empresa en que estamos empeñados prestan su decidido apoyo todos los argentinos, cualquiera sea su ideología. Y esta actitud se refleja día a día en este recinto y en la silenciosa labor de las diversas comisiones permanentes de la Honorable Cámara. Ese apoyo, en algunas

oportunidades, se manifiesta en forma de críticas constructivas o de disidencias que sus sostenedores manifiestan con un sano propósito y que siempre tienen en vista lograr el gran objetivo de la verdadera reconstrucción nacional.

Ello es así porque dentro de la gama y diversidad que caracteriza a la actividad del hombre no es posible pretender lograr una unidad absoluta de criterio en los procedimientos a fijar. Esto no es criticable sino que, por el contrario, es ponderable, puesto que tales posturas o actitudes disidentes son reflejos propios de la naturaleza humana cuando los fines son loables para todos.

— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º de la Honorable Cámara, doctor Isidro J. Odena.

**Sr. Cossy Isasi.** — Lograr la reconstrucción nacional ha costado muchos años de sacrificio, de desesperanzas y hasta de sangre al pueblo argentino, el que en algunas oportunidades llegó a un enfrentamiento interno estéril e injustificado entre hermanos.

Hubo un momento en que el observador que no fuera muy avisado, o que no tuviera un sedimento cultural, o un conocimiento interpretativo de nuestra historia, pudo creer que en esta República estaban naciendo dos o más naciones, puesto que parecía que distintos grupos de ciudadanos tenían como propósito lograr destinos históricos divorciados, que no tenían nada de común. Pero, gracias a Dios, esas divergencias, viéndolas con la perspectiva del tiempo, resultaron distintas manifestaciones de una misma fuerza congénita que todos los argentinos llevamos adentro en nuestro propósito de ser una gran nación y reivindicar nuestra postura como guía o inspiración de los pueblos latinoamericanos.

Si bien, como lo acabo de expresar, tales situaciones han sido superadas por las corrientes dinámicas que identifican a nuestro pueblo y hoy nos encontramos todos juntos empeñados en llegar a la meta que el destino nos señala, bajo la conducción de alta política que marca el teniente general Perón, no es menos cierto que aún subsisten grupos minúsculos de personas que sólo están animados por sus intereses pecuniarios y que, para colmo de males, tales intereses se confunden en la mayoría de los casos con los intereses de los grandes imperialismos que pretenden sojuzgar a los pueblos del orbe.

Tales grupos, en sus afanes desmedidos y antisociales, no reparan en los medios ni les interesa que con su actuar se perjudique el cuerpo social. Sólo buscan acrecentar sus ganancias, aunque para lograrlo perjudiquen a las clases laboriosas, serias y responsables de la Nación. Tales señores son los que han tratado siempre, y aún lo intentan, de evadir sus obligaciones para con la sociedad, ya sean esas obligaciones de carácter cultural, social, laboral, económico o financiero.

Ante tal situación y a fin de asegurar la participación real y concreta de todos, se hace necesario al Estado crear los medios idóneos que le aseguren la percepción de las contribuciones a que están obligados todos los habitantes. Esas contribuciones, se las llame impuestos o tasas, deben ser aportadas por todos, para que, de esa forma, la carga impositiva repartida resulte justa y equitativa, ya que ellas se establecen sobre la base de las posibilidades de cada uno de los obligados.

La experiencia ha demostrado, a través de los años, que en la Argentina el porcentaje de los que eluden el pago de los impuestos es considerable, y más grande y considerable es el porcentaje de las sumas que el Estado deja de percibir precisamente de los que más pueden aportar porque su patrimonio lo posibilita.

Tal evasión se ha producido, señor presidente, porque a los pudientes les ha resultado siempre más cómodo y provechoso cuestionar un pago de impuesto mediante interminables expedientes ante la Dirección General Impositiva, ya que eran sabedores de que a la postre, si no ganaban, cuando debían abonar los impuestos que trataban de eludir lo hacían a los años con dinero que había perdido el valor intrínseco que tenía cuando nació la obligación: es decir, pagaban un impuesto con plata pobre, desmejorada, envilecida.

Ante tal situación, se ha considerado de imperiosa necesidad introducir en las reformas impositivas proyectadas para lograr la reconstrucción nacional un procedimiento que coaccione a estos grandes evasores, cual es la privación de la libertad individual como sanción a su conducta antisocial.

Al incorporarse a la legislación argentina la pena de privación de libertad por la evasión fraudulenta del pago de los impuestos nacionales, no se pretende crear un Estado cancerbero del pueblo, verdugo del contribuyente, o un Estado rígido y apartado de las necesidades e inquietudes populares. Por el contrario, se introduce esa figura en la legislación argentina precisamente para asegurar a la gran masa del pueblo los recursos económicos que posibiliten su bienestar general y su felicidad.

Por ello, el proyecto de ley que nos ocupa hace un distingo bien marcado, que constituye precisamente la *ratio legis* de su contexto; es decir, sus propósitos normativos consisten en perseguir y sancionar a los grandes evasores, a aquellas personas o sociedades que estando obligadas a contribuir con su patrimonio al erario y pudiéndolo hacer no han observado su obligación, lo que constituye una conducta inadmisible. Y es así, señor presidente, porque bien sabemos que la mayoría de la población, que está constituida por hombres y mujeres que trabajan diariamente, que sólo tienen como aspiración lograr el bienestar de ellos y de su familia dentro de una nación organi-

zada, e indirectamente lograr el bien común —sean obreros, intelectuales, profesionales, etcétera—, cumple estrictamente con sus obligaciones para con la sociedad. Son los hombres y las mujeres que en los días de pago de impuestos hacen interminables colas bajo el sol o la lluvia para satisfacerlos mientras que grupos privilegiados, antisociales y antinacionales ocupan su tiempo en proyectar qué maniobra pueden realizar para ocultar sus bienes y eludir, consecuentemente, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, burlando y defraudando así al pueblo argentino.

Esos señores no han reaccionado con la sanción del pago de multas puesto que sus posibilidades financieras les permite abonarlas. Entendemos que han de reaccionar de distinta forma cuando tengan que estar en las celdas, cumpliendo condena.

Por eso la ley aplica la privación de libertad a aquellas personas que con sus maniobras evaden el pago de impuestos a partir de cierto límite, por considerar que desde ese límite estimativo se configura al gran defraudador de los intereses comunes del pueblo.

Con esa tónica es que el proyecto que consideramos no incorpora la pena alternativa, es decir que pueda ser optativo para el que ha infringido las normas impositivas el ir preso o pagar la multa, porque el legislador interpreta que el que ha evadido el pago de sumas considerables en concepto de impuestos tiene capacidad económica suficiente que le permitiría, en cualquier momento, satisfacer la multa y seguir en libertad para reiterar el perjuicio que ocasiona a la sociedad.

No obstante que nuestro bloque comparte íntegramente el espíritu que anima al proyecto venido en revisión del Honorable Senado, al igual que la mayoría de los bloques de la oposición, en el estudio realizado por las comisiones en cuyo nombre informo hemos llegado a la conclusión de que se hace necesario introducir en este proyecto algunas reformas a fin de corregir la técnica legislativa, como así mismo con la finalidad de acentuar aún más el espíritu que anima la norma. Por eso consideramos necesario suprimir del artículo 1º los términos «o intenten evadir», por cuanto el artículo 15 del proyecto que nos ocupa remite a las disposiciones del Código Penal, a las que declara de aplicación supletoria, y entre cuyos artículos tenemos el 44, que trata sobre la materia y en cuyo sistema general no se advierte la necesidad de modificar.

Durante la consideración en particular haremos referencia al nuevo texto del artículo 1º que proponemos, redactado luego de un cambio de opiniones y de haber llegado a un acuerdo con los distintos bloques que componen esta Cámara.

Con respecto al artículo 1º, propiciamos una reforma sustancial en lo referente al monto índice que demarca la configuración del delito de



defraudación fiscal, pues interpretamos que ese monto debe reducirse a cien mil pesos, o sea a diez millones de pesos moneda nacional. Las comisiones han interpretado que el monto fijado por el Honorable Senado en la cantidad de doscientos cincuenta mil pesos, o sea veinticinco millones de pesos moneda nacional, es un tanto excesivo, pues tornaría ilusoria la aplicabilidad de la ley, perdiendo ésta su eficacia. De mantenerse en su forma original, para que se configure el delito el evasor debería haber eludido el pago de una suma bastante elevada, de manera que serían muy pocos los que resultarían alcanzados por la sanción. Estimamos que la cifra de cien mil pesos que aconsejamos es una suma prudente, ya que quedan excluidos de las sanciones los pequeños y medianos contribuyentes; pero el ámbito de aplicación de la ley va a resultar de radio más amplio, llegando sus consecuencias a un número mayor de evasores, que constantemente perjudican el patrimonio del Estado con su conducta delictuosa.

Además, aconsejamos introducir un agregado al inciso d) del artículo 7º para que reafirme la garantía constitucional de que ninguna persona está obligada a declarar contra sí misma, expresando que la facultad que se otorga a la Dirección General Impositiva para hacer detener a las personas que se nieguen a prestar declaración mediante el mecanismo que la ley prevé no sea aplicable cuando el citado a declarar sea el propio imputado.

El despacho propicia también modificar el artículo 14 del proyecto, el cual a su vez modifica el párrafo segundo del artículo 45 de la ley 11.683, suprimiendo el término «fraudulentamente», y deroga la misma norma en cuanto establecía el delito de retención indebida reprimido con pena de prisión. La modificación señalada en primer término encuentra su fundamento en que la ley 20.046 puso como condición, para que surgiera la multa tributaria —no penal— respecto del agente de retención, el carácter fraudulento, lo cual contradice la naturaleza objetiva de la apropiación indebida de los fondos retenidos. En cuanto a la derogación proyectada, ella obedece a que tal conducta se encuentra prevista en el proyecto en consideración.

Por las razones dadas, en nombre de las comisiones, solicito la sanción de este proyecto de ley con las modificaciones introducidas. (Aplausos.)

**Sr. Presidente** (Odena).— Tiene la palabra el señor diputado Day.

**Sr. Day.**— Señor presidente: salvo alguna disidencia parcial que explicaremos durante esta exposición y en el debate en particular, coincidimos con el proyecto que se trae a nuestra consideración. Pero creo conveniente, en salvaguarda de esta Honorable Cámara de Diputados, decir unas pocas palabras sobre el tratamiento formal que han tenido estas normas que penalizan el fraude impositivo.

Hace algunos meses, la Honorable Cámara debatió ampliamente el asunto y produjo una sanción; existieron opiniones de mayoría y de minoría. Finalmente fue al Senado el pensamiento de esta Cámara, que, aunque fuera en mayoría y hubiera habido discrepancias, era el pensamiento del cuerpo. El Honorable Senado reserva en comisiones esta sanción y un señor senador presenta un nuevo proyecto, que fue el que tuvo tratamiento en la comisión; se cristaliza en un despacho, pasa a la Cámara, se discute y, finalmente, obtiene sanción, la que viene a esta Cámara en carácter de órgano revisor, quedando el Senado con las franquicias constitucionales que le acuerda el hecho de ser Cámara iniciadora.

Deseo manifestar que, si bien este procedimiento no está prohibido por la Constitución —incluso hay veces que razones de alta política llevan a esta forma de actuar—, nos parece útil indicar que el precedente no debe hacer huella en el trámite y en la costumbre legislativa argentina.

Dice bien Bidart Campos que la fuerza legisladora del Congreso argentino es compleja, es decir, que se engarza en dos actos que cumplen concatenadas las cámaras de Diputados y de Senadores.

Sabemos que la soberanía tiene zonas que la Constitución ha deslindado y ha marcado; pero cuando el lugar ha quedado en blanco es necesario, para la buena salud del sistema de la República, que los problemas se resuelvan con criterio político. Es decir que pensamos que algunas veces puede resultar conveniente actuar del modo en que lo ha hecho el Senado, pero eso no puede ocurrir en forma permanente y de manera que aparezca crear un nuevo estilo que significaría sin duda trazar una tajante diferencia en la actuación y relaciones de una Cámara con la otra, ya que ambas forman el órgano superior, que es el Congreso legislativo argentino.

Aclarado este aspecto, quiero manifestar que el proyecto con sanción del Honorable Senado no da la victoria ni a tirios ni a troyanos; es decir, ni a los que estuvieron con el pensamiento de la mayoría en la Cámara de Diputados, que estableció este régimen de sanción al fraude impositivo en el Código Penal y que también sostenía que la evasión fraudulenta de los tributos provinciales debía tener una contraprestación punitiva —criterios que no fueron aceptados por el Honorable Senado—, ni a quienes sosteníamos el despacho de la minoría, que introducía algo también muy importante como es la pena alternativa, prevista para que el magistrado, conforme a su ciencia y conciencia y según el caso, actuando con criterio de equidad, aplicara la multa o la prisión.

Vale decir que todos debemos ceder un poco en nuestras posiciones doctrinarias en este asunto, puesto que lo interesante —esto sí cabe des-

tacarlo, en lo que expresaron la mayoría y la minoría de la Honorable Cámara de Diputados en el anterior proyecto, así como en lo que se debatió en el Honorable Senado— es la coincidencia de que en este país hace falta una ley que enfrente y persiga al gran evasor, circunstancia que ahora cobra mayor significación, pues la reforma tributaria es en buena parte una realidad. No podemos permitir que la carga del país la soporten los más humildes o los menos advertidos acerca de estos problemas, pudiendo afirmar con énfasis que deben desaparecer para siempre los proxenetas del trabajo en la República.

Apoyamos también esta ley porque, aun siendo un instrumento para enfrentar a los grandes evasores, no supone una actuación conforme a un criterio exagerado o draconiano; por el contrario, la prudencia destaca las normas que componen este cuerpo legal. Igualmente, se trata de una regulación de fácil comprensión y didáctica, lo que posibilita que con su publicación ya sea conocida por todos los sectores —conocimiento que significa a la vez comprensión de su sentido—, caracteres todos éstos indispensables para que la ley pueda ser aplicada en toda su potencia.

Adelantado nuestro voto favorable, interesa indicar que compartimos lo expuesto por el señor miembro informante con respecto a la necesidad de adecuar la cifra que será la base que tipifique la figura delictiva que creamos por esta ley. Según la sanción del Senado, se requiere una evasión fraudulenta anual de por lo menos 250.000 pesos, límite que nosotros estimamos muy elevado; pensamos que esa cifra debe ser reducida a 100.000 pesos anuales.

Cabe agregar otra consideración sobre el límite que caracteriza la figura delictiva, porque como ya lo dijera el señor senador de la Rúa en el debate del Senado, no es técnico ni científico el modo en que se tipifica esta figura penal, determinando, lisa y llanamente, que revestirá la condición de fraudulento impositivo quien cometa una evasión fiscal que supere cierto monto mínimo. De este modo, en forma tajante se separan las aguas, quedando de un lado el delincuente evasor y del otro el simple infractor. Por ello, es más técnica y más científica la fórmula lograda en la comisión, fórmula que adelantó el señor miembro informante y que seguramente acogerá este cuerpo cuando se trate en particular, pues con la nueva redacción se logrará que quede perfilada nítidamente la figura del delincuente evasor a través de su contumaz y reiterativa conducta, egoísta y antisocial.

Cabe agregar también que compartimos, aunque parezca exagerada, la filosofía que inspira el artículo 19 en su último párrafo, cuando no da el beneficio de la franquicia del monto para convertirse en delincuente evasor a quien sea reincidente.

Ello es bueno, pues pensamos que abierta ya la puerta de la personalidad y ubicado y tipificado, el gran evasor impositivo tendrá que cuidar mucho sus actitudes futuras, porque aunque sea pequeña su infracción o su evasión caerá sobre él todo el peso de la ley.

En lo relativo al sumario administrativo de prevención, observamos que aquí se habla de este sumario para los delitos que han sido establecidos por la ley, respecto de los cuales se da a la Dirección General Impositiva la parte fundamental que se refiere a la prevención y a la fiscalización. Pero la segunda etapa —y esto es bueno distinguirlo— cae en el pensamiento que el radicalismo fijó ayer, acerca de la necesidad de una intervención más directa de la justicia en este tema. Es lógico que la primera etapa se cumpla en la Dirección General Impositiva, pero al surgir el delito, quien actúa con todo su vigor jurisdiccional es el Poder Judicial.

Creemos oportuno indicar que se han aceptado observaciones que hemos hecho en la comisión con respecto a la sanción del Honorable Senado. Por ejemplo, como bien lo manifestaba el señor diputado Cossy Isasi, la forma en que estaba redactado el inciso a) del artículo 79 daba sensación de que podían ser careados los propios imputados. Ser careado es de algún modo abrir la posibilidad de declarar contra sí mismo. Este aspecto se repetía luego especialmente en el inciso d) del mismo artículo, cuando indicaba que se le daban facultades a la Dirección General Impositiva para detener a personas que se negaran a prestar declaración.

De esta forma se vulnera el principio que se encuentra en el código procesal federal argentino y que también está vigente en forma implícita en nuestra Constitución Nacional, ya que surge del derecho de defensa consagrado por el artículo 18 y también del principio del artículo 33 de nuestra Carta Magna. Por otra parte, esto es obligatorio moralmente para el bloque de la mayoría, que ya lo ha aceptado, pues debemos recordar que el artículo 29 de la Constitución Nacional de 1949 —en este aspecto, previsor— le daba jerarquía constitucional a la materia que estamos considerando.

De este modo, apenas cambiando lo necesario a fin de que nuestra sanción tenga fuerte autoridad para imponerse en el Senado, procuramos lograr lo que todos deseamos: un instrumento para perseguir a quienes no quieren ni colaboran con la República. Para obtenerlo, adelantamos nuestro voto favorable. (*Aplausos.*)

**Sr. Presidente** (Odena). — Tiene la palabra el señor diputado Musacchio.

**Sr. Musacchio.** — Señor presidente: deseo expresar en apretada síntesis el pensamiento de nuestro bloque, de apoyo en general a la sanción del Senado. Y quiero decir que lo hacemos con comodidad porque de alguna manera la sanción del Senado, en líneas generales, mantiene la tesis doctrinaria y filosófica que había

constituido el pensamiento de lo que entonces fue en la Cámara de Diputados despacho de la minoría.

En ocasión del debate del proyecto en este recinto, dijimos que para nosotros era fundamental que antes del tratamiento de las leyes represivas en materia fiscal, tuviéramos conocimiento del paquete de reformas tributarias programadas por el Poder Ejecutivo. Lo dijimos entonces porque cuando consideramos el proyecto de represión estaban vigentes las leyes impositivas que ahora son substituidas por las que acabamos de sancionar. En consecuencia era evidente que en aquella oportunidad no podíamos hacer una correcta valoración jurídica de las normas represivas, en la medida en que no conocíamos cuál sería el pensamiento del Poder Ejecutivo con respecto a la reforma impositiva.

El Senado, al recibir la sanción de esta Honorable Cámara, dejó en carpeta, diríamos, el proyecto que nosotros habíamos aprobado. Y una vez que tuvo conocimiento del conjunto de reformas impositivas remitidas a este Congreso por el Poder Ejecutivo nacional, proyectó y aprobó con carácter originario una nueva sanción sobre esta materia, que es la que ahora estamos considerando. Es decir que el Senado de la Nación, al elaborar su dictamen, ya tuvo en cuenta todas las reformas impositivas, y pudo así efectuar su verdadera valoración a los fines de establecer las normas represivas.

Esto debió ser así cuando nosotros tratamos el tema en esta Cámara, y sigue siendo así, porque es indudable que para establecer una norma en materia de represión —con un *quantum* que en definitiva valorará el jurista para determinar la calidad de la infracción y en consecuencia la pena— teníamos que tener un conocimiento cabal de la nueva política del Poder Ejecutivo en materia de impuestos, los fines perseguidos por el poder administrador y la transformación y la valoración social y económica que él tenía con respecto a toda la materia tributaria. Es decir que ahora sí tenemos, aunque la iniciativa no esté sancionada definitivamente, una valoración del bien jurídico protegido. En consecuencia, estamos en condiciones de tratar las normas represivas.

En aquella oportunidad hicimos un debate referido a si estas normas debían o no estar incluidas en el Código Penal. Fue un debate largo, pero también ilustrativo e interesante. Con todo respeto por las opiniones de quienes adoptaron otra posición, nosotros sostuvimos que eran dos materias distintas: la típicamente penal y la típicamente fiscal, aunque fuera represiva. Por lo tanto, se requería una ley especial.

La reforma al Código Penal implicaba una serie de inconvenientes, entre ellos —lo dijo el diputado que habla— la situación que se derivaría del ámbito de aplicación del Código Penal, que tiene características nacionales en materia represiva, con lo cual resultaba que todas las

violaciones a las legislaciones de las provincias en materia impositiva resultarían sancionadas penalmente. Entendíamos que eso no podía ni debía ser así, porque entre las facultades que las provincias se reservaron, de acuerdo con el artículo 104 de la Constitución Nacional, está la de dictar sus propios impuestos, y en las leyes impositivas provinciales se establecen las multas que las provincias consideran que corresponden en cada caso. La sanción por la vía del Código Penal hubiese hecho que hasta el más pequeño evasor de una ley provincial de impuestos, por ejemplo, de sellos, podría ser sancionado de acuerdo con la norma represiva nacional.

No quiero, de ninguna manera, reabrir aquel debate. Quiero sí señalar que la sanción del Honorable Senado, que llega con la experiencia recogida del paquete de medidas impositivas, da la razón a esta tesis; es decir, en primer lugar, que es necesario que sea una ley especial, y no por la vía de una reforma al Código Penal, que reconoce características propias, como ocurre con la ley de aduanas, respecto de este tipo de normas represivas.

Por otra parte, consideramos que el proyecto se ha mejorado con las reformas que aceptó la mayoría. La sanción originaria de la Cámara de Diputados, para hacer la tipificación de esta clase de delitos, al no establecer una norma fija, hacía referencia a la magnitud económica y financiera significativa. Es decir, se delegaba indudablemente en el juez la valoración pertinente para establecer si había o no un delito: si esa magnitud económica y financiera significativa existía. Era una norma muy lata, que dejaba en manos de la justicia una interpretación muy difícil.

La sanción del Senado nos remite, en cambio, a una cantidad fija. Habla de 25 millones de pesos moneda nacional para dar concretamente la idea, que fue general en la Cámara, de reprimir al gran evasor y no al pequeño. A pesar de que esto tiene también sus inconvenientes, porque no es justo —comprendemos— que aquél que evade 24 millones no sea sancionado y el que evade 26 millones sí lo sea, ya que la diferencia no es grande, la fijación del monto tiene la ventaja de evitar una norma tan elástica que hubiese hecho difícil y arbitraria la interpretación judicial.

Después de debatir largamente en la comisión ese problema, hemos encontrado una fórmula que se aproxima bastante a lo ideal, sin ser perfecta. Se trata de establecer la cifra de diez millones de pesos moneda nacional cuando la evasión se refiere al primer período fiscal. En los sucesivos períodos hablamos de quince millones de pesos para que, de esta manera, aquel contribuyente que en el primer período fiscal evadió, pero que no llegó a los diez millones de pesos moneda nacional, no se considere en condiciones de seguir evadiendo constantemente. Digo esto porque se sumarán las distintas eva-

siones y en dos o tres períodos fiscales el evasor caerá bajo la sanción de la ley. Eso es lo que entiendo que se tuvo en cuenta en el debate de la comisión, y que fue aceptado por la mayoría.

Por todo lo dicho, deseo manifestar que en general estamos de acuerdo con esta sanción, porque contempla todos esos aspectos que fueron nuestra preocupación fundamental cuando consideramos el tema en su oportunidad. Y también porque en el debate realizado por la Honorable Cámara en el día de ayer, cuando se trató concretamente la creación de la Dirección Nacional de la Policía Fiscal Federal, se dio nueva redacción a un artículo. En esa forma se coincidió en que las facultades que el artículo 7º acuerda a la Dirección General Impositiva para la realización del sumario administrativo de prevención y las que tiene la Policía Fiscal Federal serán concurrentes hasta tanto el Poder Ejecutivo lo determine.

Señalé en la sesión de ayer que comprendía que tenía que ser así, porque la creación de esa nueva policía no es un hecho automático en cuanto a la capacitación de sus funcionarios, sino que requiere un tiempo prudencial. Esta fue la explicación que dieron los representantes del Poder Ejecutivo y que consideramos razonable.

De manera que la preocupación puesta de manifiesto por los señores diputados para asegurar la unidad del procedimiento está contemplada, con el fin de evitar que la Dirección General Impositiva y la policía fiscal, separadamente, realicen con un mismo contribuyente procedimientos paralelos que, evidentemente, violarían principios fundamentales del derecho.

Obtenida esa seguridad con la nueva redacción del artículo, estamos de acuerdo con el texto del artículo 7º de este dictamen, porque transcurridos seis u ocho meses o un año, cuando comience a funcionar la Policía Fiscal Federal, el Poder Ejecutivo o esta Honorable Cámara, si se considera necesario, podrán considerar la reforma de esta ley que vamos a sancionar, quitándole definitivamente a la Dirección General Impositiva esas atribuciones para que las ejerza la Dirección Nacional de Policía Fiscal Federal.

Con esta breve síntesis expreso los motivos que fundamentan nuestro apoyo al dictamen que estamos tratando, con la disidencia que habíamos planteado, que quedó subsanada al aceptar la mayoría una reforma al artículo 1º. En definitiva, con estas palabras dejo establecido el sentido de nuestro voto en general y en particular a favor de este dictamen.

**Sr. Presidente (Odena).** — Tiene la palabra el señor diputado Rafael.

**Sr. Rafael.** — Señor presidente: en la oportunidad del debate realizado para considerar los distintos proyectos que instrumentan la política fiscal, señalamos, y lo han reiterado todos los señores diputados, que la evasión impositiva es un hecho real y que es de tal gravedad que hace

necesario adoptar los remedios indispensables tendientes a combatirla.

En estos momentos, cuando consideramos el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado sobre sanción penal de la grave defraudación fiscal, es oportuno señalar que muchas veces, al sancionar el impuesto, se desconoce su exacta repercusión e incidencia, dado que la intención del legislador es distorsionada y alterada por la situación cambiante del mercado, por la acción de factores no existentes ni previstos en el momento de la sanción del gravamen, de la coyuntura económica, etcétera.

Por ello, cabe señalar que ha existido en las finanzas comparadas recíproca correspondencia entre la elevada presión impositiva y la evasión tributaria. El problema de la evasión impositiva se halla dentro del ámbito de una conducta que, operando desde el aspecto tributario, manifiéstase en esa opción que gira entre la acción y la inejecución, desplazándose ese obrar o esa abstención en la esfera de lo jurídico hacien-dal o de lo jurídico tributario.

Por eso es que Couture dijo bien que la libertad jurídica se expresa en el precepto de que toda persona está facultada para optar entre la ejecución y la omisión de lo que, estando jurídicamente permitido, no está jurídicamente ordenado.

Conviene en este debate precisar el concepto de lo que debemos entender por evasión. El término «evasión» está ligado a las nociones de evitar y eludir. Los autores italianos reservan la palabra «evasión» para el fraude fiscal, y al medio legal de eludir el pago del impuesto le asignan el nombre de remoción.

En América latina se ubica como problema genérico la elusión de la carga impositiva y como manifestaciones de ella la evasión legal o ilegal. En otros casos se atribuye como elemento comprensivo de la evasión y sus especies a aquéllas, o bien en relación de medios, los lícitos o ilícitos para un fin, que es la evasión. Otros autores discriminan dos clases de evasión: la punible y la no punible.

Creemos que la evasión, término genérico, tal cual ha sido aceptado por cierta corriente muy importante de la terminología financiera, es una caracterización propia. No desconocemos que el factor intención es uno de los presupuestos naturales de su existencia. El elemento ánimo debe actuar para que se dé la evasión. Sin embargo, ese problema en la materia tributaria no debe contemplarse como elemento motor o causal, sino en los efectos; o sea, en su resultado.

La evasión muchas veces sucede por la inacción, es decir la omisión de realizar el hecho imponible. Si se obtiene el resultado, evasión, por medios no prohibidos según la norma jurídica positiva, sea con conocimiento, error o ignorancia, sin intención, pero dentro de aquel límite, se ha operado la evasión fiscal.

La figura del fraude legal adquiere proporciones notables. El estudio de este fenómeno no ha sido ajeno a la doctrina que halla en las tasas excesivas el principal estímulo para las tentativas de evasión, y en la moderación y en la racionalidad de las alícuotas la posibilidad del cumplimiento exacto de las obligaciones contributivas. La evasión no se manifiesta únicamente en la abstención de realizar el acto o hecho sujeto a la probable imposición. No se agota en ella, sino que se plasma en manifestaciones afirmativas, es decir, operando actos o hechos que dan una tonalidad diversa a la incorporada por la norma impositiva abstracta en el acto positivo de realizar el hecho que habría resultado percutido sin haber caído en el ámbito del impuesto. Por ello es que, no sin resistencia, ha podido aceptarse el concepto delictual de la violación de las leyes impositivas. En algunos países, por razones históricas, su sujeción al dominio extranjero hizo considerar el pago del impuesto, al menos voluntario, como una verdadera traición.

La famosa respuesta de Jesús a los fariseos —«Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios»— afirma el derecho del Estado a cobrar el tributo. La burguesía que predominó después de la Revolución Francesa se negó a pagar el tributo. Recién después de los sacrificios de la Primera Guerra Mundial se hizo carne el deber colectivo de contribuir a los gastos de la Nación.

Cabe entonces preguntarse cómo debe operar el Estado frente a la evasión fiscal. Ya ha dicho el señor diputado Musacchio, en oportunidad del primer debate sobre este tema, que nosotros nos inclinamos por la necesidad de una ley especial. Para no reiterar todo lo que dije en aquella oportunidad, deseo simplemente recordar que «los problemas que plantea el derecho penal económico han alcanzado cierta madurez que los aproxima hacia la mayoría de edad, pero conservan cierta flexibilidad porque están en una permanente y constante evolución. Creo que no puede hablarse todavía de un derecho penal económico autónomo, porque para ello será necesario que el legislador constituya un cuerpo orgánico de principios, como los del derecho penal común, desplazando toda recurrencia a sus normas». Y agregué en aquella oportunidad: «Ubicándonos en el momento actual de la evolución del derecho penal económico hemos de concluir que, siendo flexible su contenido, y encontrándose en constante evolución, además de no existir todavía un sistema maduro de incriminación de los delitos fiscales, se impone un estudio de las valoraciones referidas a este momento concreto de la vida económico-social del país, para luego definirse o inclinarse a favor de que, por ahora, es aconsejable legislar mediante una ley especial que imponga una estrecha vinculación de dependencia con su fuente originaria, que es la ley

penal común, a la que es dable recurrir para las cuestiones no previstas o cuando no medie una disposición en contrario».

Estos principios han sido acogidos por el proyecto que estamos considerando. Por ello su artículo 15 establece que «las disposiciones generales del Código Penal serán de aplicación a los efectos de esta ley».

¿Puede hablarse de un derecho penal fiscal? ¿Ha de entenderse éste como autónomo en relación con el derecho penal común? Se ha pretendido emancipar esta rama del sistema normativo penal. Muchos autores reconocen la autonomía del derecho financiero —su ámbito es mayor que el del derecho fiscal— como rama desprendida del derecho administrativo. Su entidad es indudable y su materia inconfundible: el ingreso, la gestión y los gastos de los medios económicos de que se vale el Estado para el cumplimiento de sus fines. Esta pretensión le ha sido negada pero, cosa curiosa, no por los administrativistas, que son en cierto modo los que deben concederla, sino por los civilistas.

Desde luego, señor presidente, que no puede hablarse de un desprendimiento total. El concepto de rama es sugestivo: la rama sigue unida y se nutre en el tronco originario. La autonomía no tiene otra significación que apreciar que una cierta disciplina ha adquirido un acervo teórico y doctrinario propio, de acuerdo con la experiencia jurídica. Algunas características propias llevan a ciertos autores a concebir al derecho penal fiscal como un derecho distinto del común, con penalidades mixtas que no son ni determinadamente civiles ni penales.

En cuanto al bien jurídico tutelado podemos decir que es la obligación establecida por el Estado de pagar el tributo en la forma, mediante los medios y en el tiempo que establece la ley y su reglamentación. El incumplimiento de los deberes y obligaciones fiscales es severamente sancionado por el legislador, ya que el Estado es un acreedor que no puede esperar. Se agrava su apremio por la incertidumbre de quiénes son sus deudores y cuánto es lo que se le debe. De allí que obligue a sus posibles contribuyentes a manifestar y denunciar los hechos que de acuerdo con la ley pueden dar lugar al nacimiento de la obligación fiscal.

Si nos preguntamos, después de precisar el concepto de lo que entendemos por bien jurídico tutelado, cuál es el sujeto activo del delito, sin duda lo es el obligado. Pero como es norma en un derecho penal común, pueden ser pasibles de pena no sólo el autor material, principal obligado o contribuyente, sino también terceras personas que no tienen otra vinculación con el tributo que una imposición de la ley. Pueden ser sujetos activos del delito fiscal los que están obligados a pagar el impuesto, los que sean contribuyentes según las leyes respectivas; y lo son como responsables los que administren bie-

nes ajenos como mandantes, acreedores, administradores, etcétera.

El sujeto pasivo, que es otro de los presupuestos para la existencia del delito, se manifiesta cuando su interés entra en conflicto con el del sujeto agente. El interés perjudicado es el de la colectividad representada por el Estado.

En cuanto a los conceptos de imputabilidad y responsabilidad, nos remitimos, como ya he dicho, a las normas generales establecidas en el Código Penal, o sea en la ley común.

Como el señor miembro informante y el diputado Musacchio anticiparon que se han introducido algunas modificaciones al texto del proyecto que tengo sobre mi banca, antes de hacer referencia concreta a las disposiciones proyectadas prefiero esperar la oportunidad del debate en particular para dar a conocer mi opinión al respecto.

Finalmente, y para terminar, quiero señalar que este problema de las finanzas públicas como actividad de medios y de fines importa en muchas oportunidades una conciliación de intereses económicos enfrentados: el interés general y el de los particulares. Es difícil hallar el punto de equilibrio entre ambos intereses. Este punto de equilibrio debe consistir, desde el punto de vista tributario, en la racionalidad de las cargas manifestada en un índice que es la capacidad contributiva de la población. No se trata de una capacidad contributiva que sea un esquema o un instrumento del fiscalismo, sino que constituya la exteriorización de la aptitud real de las fuentes de donde habrán de fluir los bienes destinados a la atención de los gastos del Estado. Por ello es que no puede ser ajeno el desarrollo económico. La ley que no traduzca una necesidad jurídicossocial tendrá apariencia formal de ley, pero no substancia de tal.

Así como el progreso y la tranquilidad social dependen fundamentalmente de una sana orientación económica que interesa a todos, porque hace en definitiva al bienestar de todos, se puede señalar que la eficacia de las medidas fiscales depende esencialmente de la política económica general trazada y seguida por el Estado para concretar los dos objetivos básicos de toda política económica, que son el desarrollo económico y la justicia social.

**Sr. Presidente (Odena).** — Tiene la palabra el señor diputado Catalano.

**Sr. Catalano.** — Señor presidente: no vamos a reabrir nuevamente en esta oportunidad el debate que se realizara en ocasión del tratamiento originario de un proyecto sobre sanciones a los evasores fiscales, acerca de si tales sanciones deberían incorporarse o no al Código Penal. Todos aquellos que hemos participado del criterio que fuera mayoría en su oportunidad, adelantamos nuestro apoyo a la tesis ge-

neral que sustenta este proyecto; es decir, expresamos nuestra opinión favorable a la necesidad de sancionar penalmente a los evasores fiscales.

Pero, en atención a una circunstancia nueva, cual es la de que la subcomisión designada este año por decreto número 480, en virtud de lo que dispone la ley 20.509, ya ha avanzado mucho en la redacción del nuevo Código Penal de la Nación, al extremo de que se ha terminado la primera redacción de la parte general, debido a la actividad que ha desplegado esta subcomisión que preside el señor diputado Porto y en la que se trabajó intensamente, hemos decidido no insistir en la incorporación de este tipo de figuras al Código Penal.

Reitero que esta posición se tomó teniendo en cuenta esta circunstancia, y no porque reconozcamos que sostuvimos la tesis equivocada por cuanto la materia, como se dijo en aquella oportunidad, era bastante opinable.

Ahora, frente a esta nueva y feliz circunstancia de estar concluida la elaboración de la parte general del nuevo Código Penal, deseamos que sea la comisión designada por el decreto 480, y particularmente la subcomisión encargada de la redacción del nuevo Código Penal, los organismos especializados que en definitiva den su opinión sobre si este tipo de sanciones debe incorporarse al Código Penal o si, por el contrario, debe mantenerse en una ley especial.

Con este sentido dejamos aclarado y adelantamos nuestro voto favorable al proyecto que la Honorable Cámara trata.

**Sr. Presidente (Odena).** — Tiene la palabra el señor diputado Porto.

**Sr. Porto.** — Señor presidente: quiero señalar que comparto en un todo las expresiones formuladas con elocuencia y versación por el compañero de bancada, el señor diputado Cossy Isasi, así como también los sólidos argumentos dados por la mayoría en el Senado de la Nación.

Solamente quiero añadir alguna breve acotación en el sentido de que la determinación de un tope mínimo para constituir el ilícito —que puede ser de 10 millones de pesos, por ejemplo, en el caso de esta ley— no es tan arbitrario como pareciera, porque si bien es cierto que por esta tipificación quien evade 9 millones no comete delito, en tanto que sí lo comete el que evade 11 millones, también es cierto que la legislación penal argentina contempla, en diversas suposiciones, bien un espacio de tiempo, bien un *quantum* para configurar o no ciertos tipos ilícitos, o para cambiarlos completamente de figura, elevando la pena hasta seis veces más. Me refiero, por ejemplo, a los artículos 89, 90, 92 y 93 del Código Penal. En el caso de los artículos 89 y 90, según que la privación para el trabajo dure más o menos de un mes, la pena será, en el

primer supuesto, de un mes a un año de prisión, y en cambio, en el segundo, de un año a seis años de igual sanción, cambiándose el tipo, que será en un caso de lesiones leves y en el otro de lesiones graves.

Efectuada esta aclaración, debo recalcar que la comisión ha introducido muy pequeñas reformas a la sanción del Senado por común acuerdo de todos sus integrantes, como lo ha destacado el señor miembro informante y lo ha hecho especialmente en los incisos a) y b) del artículo 7º, a efectos de asegurar más sólidamente la garantía constitucional según la cual nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; de manera que la facultad investigativa o de citación para

hacer declarar o para carear no tiene atingencia o vigencia con respecto al imputado.

Con estas breves consideraciones, doy mi más completo acuerdo a la sanción del Honorable Senado, desde luego con las pequeñas reformas que el señor miembro informante ha adelantado. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

**Sr. Presidente** (Odena). — Invito a la Honorable Cámara a pasar a cuarto intermedio hasta el próximo día miércoles, a las 16.

—Se pasa a cuarto intermedio a la hora 18 y 40.

MIGUEL J. SILVA REY.  
Director del Cuerpo de Taquígrafos.